

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-3977-2021  
CARATULADO : ALVARADO/FISCO DE CHILE -CONSEJO DE  
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, ocho de Agosto de dos mil veintidós

**VISTO:**

**A folio 1,** con fecha 28 de abril de 2021 comparece **Pedro Edgardo Ruz Castillo,** abogado, en representación judicial de **MIREYA ELIANA ALVARADO GONZÁLEZ,** jubilada, C.I. N° 3.511.033-K, ambos con domicilio en Catedral N°1009, oficina 302, comuna de Santiago, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios, en contra del **FISCO DE CHILE,** representado legalmente por **Ernestina Ruth Israel López,** en su calidad de Presidenta del **Consejo de Defensa del Estado,** ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, solicitando se le indemnice por los daños y perjuicios derivados de la detención, prisión política, torturas y exilio, y se condene al demandado a la reparación y pago de la cantidad de **\$200.000.000.-** por daño moral o las cantidades que



Foja: 1

en derecho se determine, con los reajustes e intereses correspondientes, más costas.

Relata que, el 23 de abril de 1974, el domicilio de su representada fue violentamente allanado por funcionarios de la Fuerza Aérea y del Comando Conjunto, en razón de que había arrendado un vehículo de su propiedad a Víctor Toro, miembro de la Comisión Política del MIR, con quien había mantenido una relación sentimental.

Los agentes, prosigue, encontraron el comprobante de arrendamiento, e interrogaron agresivamente a la demandante y a sus dos hijos respecto del paradero de Víctor Toro, para luego conducirlos a la Academia de Guerra Aérea. En el trayecto, uno de los agentes procedió a quemar las piernas de su hija menor, de tres años de edad, para presionarla a entregar la información requerida, todo ello en presencia de su hijo de cinco años, quien fue obligado a presenciar los malos tratos a su madre y su hermana, junto a las que se le sometió a prisión, lo que en sí mismo configura tortura.

Después de haberla sometido a interrogatorio, prisión y tortura, los servicios de seguridad siguieron hostigándola debido a la relación



**Foja: 1**

sentimental que había mantenido con Víctor Toro, lo que la forzó a exiliarse el 14 de junio de 1974, tras lo que deambuló por diversos países, para llegar a Francia bajo la protección de la ACNUR.

Agrega que a la época de los hechos, Víctor Toro era uno de los objetivos primordiales de los aparatos de seguridad de la Junta Militar, junto con Carlos Altamirano y Miguel Enríquez, y ello explica la violencia extrema con la que fue tratada la demandante y su familia.

Añade que la prisión política de la que la demandante Mireya Eliana Alvarado fue objeto, consta en el Informe Valech, listado de número de nómina de ex prisioneros N.º 957.

Como fundamentos de derecho, refiere primeramente las circunstancias históricas de la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, e invoca, como fundamento de la responsabilidad del Estado, el artículo 38 inciso segundo de la Constitución



Foja: 1

Política de la República, el artículo 4 de la Ley 18.575, y 2314 y siguientes del Código Civil.

Añade que se encuentra acreditada la calidad de víctima de la demandante, así como la participación de agentes del estado como autores del ilícito, además de la existencia de daños físicos, patrimoniales y morales, por lo que la relación de causalidad entre los hechos que se describen y el actuar ilícito de agentes del estado es notoria.

Sostiene que, en cuanto al daño moral, entendido este como el dolor o sufrimiento generado por los hechos descritos, es enorme, por cuanto no solo está presente el resquemor provocado por estos hechos, sino que el desarrollo de toda una vida de carencias afectivas y económicas a partir del crimen cometido por dichos agentes públicos.

En conformidad con lo anterior, prosigue, se cumplen a cabalidad todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual, existiendo una actuación anormal en extremo de agentes del Estado, como parte de una política sistémica de la Dictadura Militar, ejecutada en orden a eliminar toda forma de disidencia, y que en este caso resultó en una violencia física y psicológica en extremo en contra



Foja: 1

de la demandante. Todo ello, vulnera las normas antes reseñadas, y por sobre todo las normas sobre Derechos Humanos y generan la responsabilidad del Estado.

Sostiene en el siguiente apartado que las acciones judiciales en casos de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que deduce del artículo 3 del Convenio de Ginebra sobre el Tratamiento a los Prisioneros de Guerra y el relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, cuya aplicación obedece a múltiples actuaciones y manifestaciones, tanto expresas como tácitas, de la Junta Nacional de Gobierno, altos mandos militares de la época y personeros civiles de dicho régimen de ipso facto, quienes se encuentran contestes en que, entre septiembre de 1973 y 1976, existía en Chile una situación de guerra interna, a partir de la declaración del Estado de sitio como medida de excepción constitucional a lo largo del territorio nacional, lo que supuso la introducción de procedimientos penales de tiempos de guerra regulados por el título III del Libro Primero, artículos 71 y siguientes del Código de Justicia Militar, situación que se ve refrendada por la carta



**Foja: 1**

dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante 1974 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Así, los hechos relatados constituyen infracciones graves a los Convenios de Ginebra y, por lo mismo, se constituyen en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Añade que la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes tiene en cuenta, además, el especial contexto histórico en que se cometieron, toda vez, que fueron ejecutados por agentes de un régimen de facto que, tal como se ha demostrado en reiteradas causas sobre violaciones a los derechos humanos ventiladas ante los tribunales de la República, practicó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con lo que la sensación de impunidad y temor existente en la población de la zona y el país constituía una realidad que se debe tener presente al fallar.

Hace presente que el Estado de Chile ha robustecido paulatinamente el bloque normativo de protección de los derechos humanos, ratificando la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, su Protocolo Facultativo,



Foja: 1

la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que una eventual declaración de prescripción de la acción civil en autos, no resultaría acorde con el deber asumido por el Estado de Chile ante la comunidad internacional, e infringiría el artículo 148 de los Convenios de Ginebra, que veda a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidad en que hayan incurrido.

Respecto del daño, afirma que existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que experimentó la víctima junto con su familia, daño que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, merita ser reparado a través de una indemnización. Respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.



Foja: 1

**A folio 12** rola notificación de la demanda, practicada el 22 de julio de 2021.

**A folio 13,** comparece Carolina Vásquez Rojas, abogada en representación del Fisco de Chile, quien contestó la demanda, oponiendo como primera cuestión, la **excepción de reparación satisfactiva;** esgrimiendo la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el actor, exponiendo latamente, el marco general sobre las reparaciones otorgadas, agregando que las negociaciones entre el Estado y las víctimas, revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras, radicadas en grupos humanos más específicos; concurso de intereses que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidas que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación; programas que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Señala que dentro de los objetivos a los cuales se abocó preferentemente la llamada Comisión





Foja: 1

Verdad y Reconciliación, también llamada "Comisión Rettig", en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una **pensión única de reparación** para los familiares directos de las víctimas, y algunas prestaciones de salud. Dicho informe, sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso, que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; por él se buscaba, en términos generales, **"reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de víctimas"**, a que se refiere su artículo 18.

Asumida esta "idea reparatoria", tanto la Ley 19.123 y las demás normas conexas, como por ejemplo la Ley 19.992, referida a las víctimas de tortura, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Así, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos



Foja: 1

se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas.

Afirma que en la especie, el actor ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y N° 20.134. La ley 19.992 que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas; así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, haciendo presente además que la misma parte percibió en forma reciente el aporte único de reparación Ley N°20.874, por **\$1.000.000.-**

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido



**Foja: 1**

el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda.

Finalmente, hace presente las reparaciones simbólicas, mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones; las que pretenden reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

De lo expuesto, sostiene que puede concluirse que los esfuerzos realizados por el Estado para reparar a las víctimas de DD.HH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones



Foja: 1

razonables a nuestra realidad financiera; escenario en el que tanto la indemnización que se solicita en autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora aludidas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación; motivo por el cual, en definitiva, **opone la excepción de reparación integral**, por ya haber sido indemnizado el actor.

En subsidio de la excepción anterior, **opone la prescripción extintiva de la acción**, con arreglo, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto, solicitando en consecuencia que, por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato efectuado por el demandante, la detención ilegal, privación de libertad y tortura que sufrió, ocurrieron **a partir del 23 de abril de 1974**, extendiéndose hasta un momento no especificado, pero **no posterior al 14 de junio de**



Foja: 1

**ese año, fecha en que tuvo que exiliarse;** entonces, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en Septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **22 de julio de 2021,** ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil; motivo por el cual opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable, **opone la excepción de prescripción extintiva** de 5 años, contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, del ya citado código; debido a que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil de marras, transcurrió también con creces, el plazo pertinente.



Foja: 1

Posteriormente, realiza un lato análisis relativo a la prescripción, haciendo presente que no existe norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, por lo que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual (artículo 2332); agregando que el plazo debe contarse, en la especie, no desde la detención del demandante, sino que desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; haciendo presente además que numerosa jurisprudencia sobre la materia reiteran tal circunstancia.

Sostiene que la prescripción es una institución universal y de orden público, y que las normas que la consagran, contempladas en el Título XLII del Libro IV del Código Civil, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho, y no sólo al privado. La imprescriptibilidad es excepcional y requiere una declaración explícita, que en este caso no existe.



Foja: 1

Finalmente, sostiene que los ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia; haciendo presente que dichos instrumentos, tales como la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", los "Convenios de Ginebra", la "Resolución N° 3.074, de fecha 3 de Diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas", y la "Convención Americana de Derechos Humanos", establecen imprescriptibilidad para las acciones penales.

En subsidio de las defensas planteadas, y en cuanto al daño e indemnización reclamadas, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido; señalando que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de Justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.



Foja: 1

En subsidio de las excepciones previas, indica que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (N°19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que, por lo demás, "seguirá percibiendo a título de pensión", como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; haciendo presente que, de no accederse a tal petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Seguidamente, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca la obligación y además desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada; y en cuanto a los intereses, señala que conforme al artículo 1551 del Código Civil, el deudor no está en





Foja: 1

mora sino hasta cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia; cuestión que así ha establecido la jurisprudencia, de manera uniforme; motivos por los cuales los reajustes e intereses, sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

**A folio 18,** la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reitera todos los argumentos de hecho y derecho aludidos en el libelo de demanda.

En cuanto a la **excepción de reparación satisfactiva o integral, o de pago,** opuesta por el demandado, solicita su rechazo, pues considera que los beneficios pecuniarios percibidos al amparo las leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones posteriores sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado entre 1973 y 1990, pero que en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por nuestra mandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales. Sostiene que la propia Ley 19.123, en su artículo 2, establece que ""Le corresponderá



Foja: 1

*especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas"*, notando que la palabra promover no es sinónimo de reparar, y que la propia Ley en comento no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24. Cita jurisprudencia en apoyo de sus asertos, y finalmente sostiene que, basarse en la Ley 19.123 y sus modificaciones llevaría a concluir que el Congreso se estaría avocando el conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y que el propio responsable, el estado, estaría fijando unilateralmente los montos de las indemnizaciones, e invoca jurisprudencia que considera compatible una indemnización con la reparación de los informes Rettig y Valech.

Respecto de la **excepción de prescripción extintiva**, afirma que es insostenible que las únicas reglas que regulen la materia sean las contenidas en el Código Civil, por cuanto ello apareja negar validez y eficacia a otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional, que ya han sido aplicadas por los Tribunales Superiores. Añade que la argumentación de



**Foja: 1**

la demandada es improcedente a la luz de la doctrina de los autos propios, pues alegación de no existir un régimen especial de responsabilidad del estado es incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Añade que la acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad (artículo 38, inciso segundo de la Constitución Política), no establece plazo de prescripción; que su contraria ignora las normas de responsabilidad contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con un enfoque reduccionista, supuesto que permitiría castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas; y que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil, lo que impide su aplicación analógica.



Foja: 1

En cuanto al monto demandado, afirma que la demanda indemnizatoria exige peticiones concretas, y que hechos tan graves sólo pueden ser reparados desde el punto vista simbólico, emocional y patrimonial por montos que impliquen no solo un reconocimiento simbólico de la magnitud del daño causado sino que impliquen una mejora efectiva en la calidad de vida de la víctima.

En cuanto a que la regulación del daño moral deba considerar los pagos ya recibidos y guardar armonía con los montos fijados por los Tribunales, afirma que la Ley N° 19.123 concede una pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno una incompatibilidad entre las reparaciones que realiza el estado y los montos a título de indemnización de perjuicios que se persiguen en sede judicial. En consecuencia, se trata de dos formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia.

Respecto de los reajustes, sostiene que la obligación del Fisco existe con anterioridad a la



**Foja: 1**

dictación de la sentencia, por consiguiente, no existe discusión acerca del plazo en que este reajuste debe computarse. Asimismo, el reajuste tiene sólo tiene por objeto la mantención del poder adquisitivo de la moneda, por lo que, si los valores no son reajustados y se paga el monto condenado a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, no se considerará la devaluación de la moneda durante la secuela del juicio, lo que se traduce en el pago de una cantidad inferior a la que corresponde jurídicamente.

En cuanto a los intereses, afirma que éstos se devengan desde el incumplimiento, en circunstancias de que la propia demandada ha reconocido los hechos.

**A folio 20,** la demandada evacúa la dúplica reiterando su argumentación anterior y citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

**A folio 22** se recibió la causa a prueba.

**A folio 44,** con fecha 21 de julio de 2022, se citó a las partes a oír sentencia, por resolución que se encuentra firme.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**



Foja: 1

**PRIMERO:** Que, como se dijo, **Pedro Edgardo Ruz Castillo**, abogado, en representación judicial de **MIREYA ELIANA ALVARADO GONZÁLEZ**, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se le indemnice por los daños y perjuicios derivados de la detención, prisión política, torturas y exilio, y se condene al demandado a la reparación y pago de la cantidad de **\$200.000.000.-** por daño moral o las cantidades que en derecho se determine, con los reajustes e intereses correspondientes, más costas.

Funda su pretensión en los argumentos ya explicitados en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

**SEGUNDO:** Que, notificado el demanda, contestó la demanda y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, conforme las alegaciones y defensas debidamente reseñadas en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.



Foja: 1

**TERCERO:** Que, a objeto de acreditar sus alegaciones, la parte demandante se valió de los siguientes medios probatorios:

**- DOCUMENTAL:**

**A folio 1:**

1. Copia de la página 555 del Listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en la que se observa el nombre de la actora con el número **957**.

**A folio 27:**

2. Copia de extracto del diario La Tercera titulado *"Estos son los 10 hombres más buscados de Chile"*.

3. Copia de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Órdenes Guerra y otros vs. Estado de Chile*.

4. Copia de sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol 82-2021.

**Testimonial:**



Foja: 1

**A folio 40,** con fecha 30 de junio de 2022, deponen los siguientes testigos, legalmente juramentados y libres de tacha:

1. **Sylvia María Castillo Araya,** quien al **punto 1** del auto de prueba expone que le consta que la demandante, madre de dos niños, fue detenida por efectivos de la Fuerza Aérea y llevada a la Academia de Guerra con sus hijos, todos los que fueron torturado. Entiende que la familia tuvo que salir al exilio a mediados de 1974 por el hostigamiento de que eran víctimas, porque supuestamente la señora Mireya había tenido una relación con un dirigente del MIR que era muy buscado. Muchos años después la ha visto en distintos lugares donde hacen terapia a las víctimas y en reuniones de ex presos o familiares de víctimas de la dictadura, y no le cabe duda del deterioro que ella ha sufrido, tanto cognitivo como físico, que es evidente.

Al **punto dos,** señala que es nítida la relación entre lo vivido por la demandante y sus hijos y obrado por agentes del estado, por lo que debieron vivir en el exilio en distintos países. Los agentes no sólo los detuvieron, sino que quemaron con cigarrillos a la niña de tres años. Agrega que la





Foja: 1

detención marca un antes y un después para Mireya, quien era una profesional con hijos, y se convirtió en una familia errante, que arrastró el daño sin tener un tratamiento que les permitiera sanar. Ahora está convertida en una anciana que no es autovalente, y cuyo relato de vida tiene que ver con esos momentos.

Al **punto tres**, señala que nada puede reparar el daño causado.

1. **María Elena Ugalde Castillo**, quien al **punto 1** del auto de prueba, expone que la demandante fue detenida en su domicilio con sus dos hijos por miembros de la Fuerza Aérea y el Comando Conjunto quienes, en el trayecto a la Academia de Guerra, aplicaron cigarrillos en las piernas de su hija pequeña. Luego fue torturada enfrente de sus hijos, lo que le produjo un daño psicológico profundo y una angustia que permanece hasta el día de hoy.

Al **punto 2**, sostiene que claramente existe un nexo causal, a lo que agrega que es imposible que una persona pase por circunstancias tan terribles y denigratorias para la dignidad humana sin tener un daño profundo, como tiene la demandante en su condición de madre de dos hijos pequeños a quienes



**Foja: 1**

no pudo defender de la brutalidad de los agentes de la dictadura. Le consta porque ha interactuado con ella desde niña en el contexto de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y ha visto su angustia permanente y dolor profundo.

Al **punto 3**, se remite a lo señalado y afirma que no hay monto de dinero que pague el daño producido.

**CUARTO:** Que la demandada no rindió prueba alguna el juicio.

**QUINTO:** Que a **folio 45** se agregó como medida para mejor resolver oficio respuesta del Instituto de Previsión Social **N°4792-5514**, que da cuenta que el demandante ha recibido, a febrero de 2022, la cantidad \$34.995.814.- por concepto de Pensión Ley 19.234, \$1.000.000.- por Aporte Único Ley 20.874, y \$562.653.- por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$ 36.558.467.-**. Su pensión actual es de \$237.796.-.

**SEXTO:** Que, son hechos de la causa, por no haber sido objeto de controversia, que se encuentran además acreditados con el mérito del documento reseñado en el motivo anterior, los siguientes:



Foja: 1

1. Que la actora tiene la calidad de "Víctima de Prisión Política y Tortura", conforme al Informe Valech;

2. Que, al mes de febrero de 2022, la demandante ha percibido la cantidad \$34.995.814.- por concepto de Pensión Ley 19.234, \$1.000.000.- por Aporte Único Ley 20.874, y \$562.653.- por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$ 36.558.467.-**.

**SÉPTIMO:** Que, el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos **13 años** desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios de considerados válidos (se



Foja: 1

recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se deja constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

**OCTAVO:** Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que "Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica", cuyo artículo primero, contenido en el Título I "De la pensión de reparación y bono", dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del*



Foja: 1

*Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a **\$1.353.798.-**, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a **\$1.480.284** para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a **\$1.549.422**, para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.



Foja: 1

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono establecidos, se devengarían a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, las que podrían ser solicitadas desde la publicación de la misma (ley).

**NOVENO:** Que, por otro lado, mediante la Ley N° **20.874**, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que "Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile", de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de **\$1.000.000.-**, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.



Foja: 1

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."*

**DÉCIMO:** Que, tal como consta del documento reseñado en el motivo quinto, la demandante **Mireya Eliana Alvarado González**, Rut: 3.511.033-k, detenta la calidad de "Preso Político y Torturado", constando en autos que percibe en virtud de tal calidad, al mes de febrero de 2022, la suma de \$1.000.000.-, por concepto de aporte único establecido por la Ley N° 20.874, y asimismo fue beneficiario de la Ley N° 19.992 concepto por el que recibió la cantidad de \$34.995.814.-, y aguinaldos por la suma \$562.653.-, totalizando **\$36.558.467.-**.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco de Chile se ha fundado, como ya se dijo, en que el actor ya ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizado por daños cuya génesis radica en idénticos hechos.



Foja: 1

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de "Preso Político y Torturado" constituye un acto unilateral, y sus efectos, como en la especie lo es el pago de la pensión a las víctimas, no resulta posible entenderlos como una "indemnización", como pretende el Fisco al sostener su excepción de pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a entender que lo que el Estado de Chile pretendió al crear la "Comisión Valech" fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el actor beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "preso





Foja: 1

político torturado”, tal hecho no era óbice para que interpusiera la acción civil pertinente, como lo ha hecho mediante la demanda de marras; motivos todos los cuales conducen a **desestimar la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco.**

**DECIMO TERCERO:** Que, en subsidio de la excepción razonada previamente, el demandado opuso la excepción de prescripción de la acción, fundado en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.

Ante tal alegación, cabe tener presente que, fluye del artículo quinto de nuestra Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Carta establece.

Dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones



Foja: 1

contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

**DECIMO CUARTO:** Que, la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, "*tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de*



Foja: 1

aqueellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha



Foja: 1

*reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."*

Por todo lo expuesto, la excepción de prescripción será desestimada; misma suerte que correrá la excepción de prescripción subsidiaria, por encontrar ésta, de igual manera, su fundamento en normas de derecho interno, que, como ya es claro, no son aplicables al caso de autos.

**DECIMO QUINTO:** Que, habiéndose desestimado la prescripción de la acción civil, cabe ahora pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, la demandante detenta, la condición de "Preso Político y Torturado", detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de haber mantenido una relación sentimental con Víctor Toro, dirigente del MIR, como así lo señala la actora en su demanda y, como afirma la testigo Sylvia Castillo.



Foja: 1

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante todo el período en que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Por lo expuesto, este sentenciador concluye que dicha situación produjo en la demandante daños que es necesario reparar por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo posible tolerar que en la especie los agentes del Estado actuaran de manera reprochable y contrarios a los derechos que tanto la legislación interna como internacional protegen, por lo que el Estado debe responder por ello.

**DECIMO SEXTO:** Que, con la documental rendida por la parte demandante y no objetada por causal legal, en su oportunidad, se puede establecer que está reconocida su calidad de "Preso Político y Torturado" (Nómina de personas reconocidas como



Foja: 1

víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde la demandante ocupa el lugar **N°957**, es posible concluir que una persona que es violentada física y psicológicamente, como en el caso de autos, sufre perjuicios, daño emocional y secuelas tanto físicas como psicológicas que perduran hasta la actualidad y que deben ser reparados, situación que se ve corroborada por las declaraciones contestes de las testigos que depusieron en autos y que corresponde a la consecuencia normal de la detención, prisión, tortura y exilio sufridos por la demandante.

**DECIMO SÉPTIMO:** Que, encontrándose acreditado el hecho que la demandante, debido a la detención, prisión y torturas que experimentó los que repercuten hasta la actualidad, experimentó un daño que sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral", y que el demandado no justificó, los montos que percibe o ha percibido el demandado en su calidad de "Preso Político y Torturado", lo que sin perjuicio, hace igualmente plausible acoger la demanda, condenándose al Fisco de Chile, a pagar a ésta la suma única y total de **\$100.000.000.- (cien millones de pesos)** suma que se estima justa y equitativa, considerando que dicha parte es



Foja: 1

beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas, lo que no es óbice para acoger la acción indemnizatoria por el daño sufrido de manos de agentes del Estado.

El monto indemnizatorio fijado previamente, deberá pagarse debidamente reajustado entre la fecha del presente fallo y aquella en que se haga el pago total y efectivo; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, devengados durante el mismo período.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

**SE DECLARA:**

**1.-** Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el demandado;

**2.-** Que **se acoge** la demanda intentada **a folio 1**, y se condena al Fisco de Chile a pagar a la demandante, **Mireya Eliana Alvarado González**, la cantidad de **\$100.000.000.-** en la forma señalada en el motivo final.



C-3977-2021

Foja: 1

**3.-** Que, se condena en costas al demandado.

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

**ROL C-3977-2021**

**Dictada por Wilson Rodríguez Rodríguez, Juez  
Suplente del Primer Juzgado Civil de Santiago.**

rfu

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, ocho de Agosto de dos mil veintidós**

